

# Bajo amenaza un retiro digno

En Puerto Rico, sobre el 60% de los jubilados tienen ese beneficio como único ingreso, mientras un sector de salud en crisis depende del programa federal

● MARICARMEN RIVERA SÁNCHEZ maricarmen.rivera@gfrmedia.com

**Según estimados de AARP, aun recibiendo los beneficios actuales, el 39% de los adultos mayores viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico, una realidad que afectaría entonces al 69% de esta población si se concretan las reducciones.**

La posibilidad de que se reduzcan los fondos del Seguro Social y de Medicare, como trascendió recientemente en el informe anual que publican los síndicos de ambos programas federales, es motivo mayor de alarma para Puerto Rico, un país con una población que envejece a paso acelerado y que vive al borde de la pobreza. Expertos en el tema advirtieron sobre el impacto desigual que una reducción en ambos programas, de concretarse, tendría en las poblaciones más vulnerables de la isla, como las familias dirigidas por madres solteras y la población de adultos mayores.

José Acarón, director en Puerto Rico de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP, por sus siglas en inglés), urgió al gobierno y a la población a comunicarse con el Congreso de Estados Unidos para reiterar la importancia de atender la crisis de los dos programas que más benefician a las personas en la tercera edad. En Puerto Rico, dijo, hay 827,567 personas que reciben el Seguro Social, de los cuales 62% reciben el beneficio por estar retirados.

“Sobre el impacto que tiene esto, no solo en el individuo, sino en la economía de Puerto Rico, los pagos del Seguro Social son una inyección de \$11,400 millones a la economía de Puerto Rico cada año”, afirmó Acarón, al citar estudios realizados por AARP sobre el impacto en los estados y territorios de un posible recorte de beneficios.

## EL PESO DEL SEGURO SOCIAL EN EL PRESUPUESTO BORICUA

Su preocupación es que, aun recibiendo los beneficios actuales, el 39% de los adultos mayores viven bajo los niveles de pobreza en Puerto Rico, una realidad que afectaría entonces al 69% de esta población si se concretan las reducciones. “El Seguro Social fue hecho precisamente para sacar a la gente de la pobreza. Parte del problema es que se supone que el Seguro Social sea solamente un 35% del ingreso para el retiro, pero en Puerto Rico, sobre 60% de la gente que recibe Seguro Social tienen eso como su único ingreso y eso es lo que hace que esto sea mucho más impactante en Puerto Rico que en otras jurisdicciones”, aseveró Acarón.

El mes pasado, la junta de síndicos del Seguro Social publicó el Informe Anual de los Fiduciarios para el 2025. El informe advierte que la fecha de quiebra –o la fecha en que los programas de salud Medicare no tendrán fondos suficientes para pagar la totalidad de los beneficios– se adelantó, del año 2036, a 2033, es decir, dentro de ocho años. En cuanto a los fondos fiduciarios del Seguro Social, el informe advierte que, de no mediar acción del Congreso, el programa no podrá pagar los beneficios completos a partir de 2034, en lugar del estimado de insolvencia que se publicó en el informe actuarial del año pasado, que apuntaba a que la fecha límite sería 2035.

Sin ajustes, cuando llegue el año de insolvencia, dice el informe, el Seguro Social solo podría pagar al 81% de los beneficios.

De acuerdo con Acarón, el beneficio promedio que reciben los puertorriqueños en su cheque de Seguro Social es de \$1,265 mensuales, o \$14,697 anuales. La reducción proyectada llevaría ese cheque a unos \$900 mensuales. “Eso tiene un impacto fuerte, porque aumentaría la gente bajo el nivel de pobreza. En vez de recibir \$1,200, van a tener \$300 menos y eso aumentará la población que está bajo el nivel de pobreza en los mayores de 65 años”, sentenció. “Así que esto sí tiene un impacto”.

## MÁS PRESIÓN AL SECTOR DE LA SALUD

El economista Iyari Ríos González detalló, por su lado, que la parte del Medicare afectada sería la correspondiente a la cobertura de hospitalizaciones, lo que se conoce como la parte A. Esto, dijo, llama a la necesidad de replantearse el sistema –y los costos– del sistema de salud norteamericano que se replica en Puerto Rico. “Aunque es importante tener esa discusión sobre la política pública –de aumentar recursos al Medicare o reducir beneficios–, pienso que también hay que conversar sobre por qué los gastos médicos son tan altos en Estados Unidos y Puerto Rico”, aseveró. “Tengo la impresión de que hay un consenso generalizado que los planes tienen una gran responsabilidad sobre este asunto; una alternativa sería reducir esos costos para los servicios médicos que recibe la ciudadanía”.

Sobre la amenaza de reducción en los beneficios del Seguro Social, el también profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras dijo que, por la relación de “subordinación política con Estados Unidos, esos programas son muy importantes (en la isla) porque la economía de Puerto Rico presenta unos indicadores que son diferentes a la economía de Estados Unidos”.

“El 40% de la población vive bajo los niveles de pobreza. Eso significa que no tienen recursos necesarios para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda. Si tomamos en consideración las familias que tienen menores, la tasa sube a 50%”, detalló Ríos González. “Si a eso se le suman las familias que son dirigidas por mujeres, jefas de familia, la tasa aumenta a 70%. Eso significa que, de cada 10 familias con una madre soltera, siete viven bajo los niveles de pobreza”, afirmó, agregando que una reducción en ambos programas, que representan transferencias directas a los individuos, agravaría ese panorama.

## PREOCUPACIÓN POR LOS VIEJOS

Para Yolanda Varela Rosa, procuradora de las Personas de Edad Avanzada, el anuncio es más grave en Puerto Rico pues más del 85% de las personas de edad avanzada dependen del Seguro Social como ingreso principal, “y tal vez como ingreso único, además de que 600,000 adultos mayores están inscritos en Medicare”. “Esto es una realidad dura porque nuestros adultos mayores no cuentan con una red de alternativas robustas que no sean esas. El que tiene Seguro Social, hace 10 o 15 años eso no ha subido, a pesar de que hay una inflación en los precios, la luz, el agua... todo aumenta, pero el Seguro Social se queda igual”, aseveró. “Esto va a trastocar a todos los adultos mayores”.

Varela Rosa catalogó de “inaceptable” la propuesta de reducir los beneficios del Seguro Social y recordó que los adultos mayores ya aportaron a este programa durante sus años más productivos. “Es imprescindible fortalecer programas para proteger a quienes más dependen de esto, que son los adultos mayores”, dijo la procuradora.

### ¿VIABLE INCENTIVAR EL AHORRO?

El contador público autorizado Kenneth Rivera Robles opinó que la alternativa más lógica, como incentivar el ahorro entre los puertorriqueños, no siempre es posible en una sociedad que vive cheque a cheque. “Uno no puede dar de lo que no tiene. No hay tanto ingreso disponible para ahorrar porque la gente está en el Plan de Retiro del gobierno, pero eso tampoco es obligatorio. La gente que pone dinero en IRAs (cuentas de retiro individual) son menos del 5% de los contribuyentes”, dijo. “Sí se deben buscar mecanismos para procurar que la gente ahorre, pero la gente no ahorra no por falta de disciplina, sino por falta de capacidad económica”.

De otra parte, el Sistema de Retiro alcanza en Puerto Rico a un solo segmento de la población, ya que acoge a 144,232 retirados de municipios, corporaciones públicas, agencias del gobierno central y la Judicatura. El sistema tiene 117,891 servidores públicos activos. El nuevo director ejecutivo de la Junta de Retiro, Arnaldo J. Ortiz Miranda, dijo en declaraciones escritas que esa dependencia, sucesora de la Administración de los Sistemas de Retiro y del Sistema de Retiro para Maestros –luego del proceso de reestructuración financiera del gobierno bajo la ley federal Promesa-, administra actualmente “los tres principales sistemas de pensiones (Gobierno Central, la Judicatura y Maestros) pagando alrededor de \$2,500 millones anuales en pensiones”.

“Nuestra misión principal en la agencia es proteger y garantizar el pago las pensiones y beneficios para alrededor de 144,232 pensionados de municipios, corporaciones públicas, agencias del gobierno central y la judicatura”, subrayó Ortiz Miranda.